

PERONISTAS Y MILITARES. UNA VIEJA RELACIÓN EN UN NUEVO CONTEXTO

PERONISTS AND THE MILITARY.
AN OLD RELATIONSHIP IN A NEW CONTEXT

ANABELLA GORZA ·

Anabella Gorza es becaria doctoral del CONICET e investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata.
e-mail: cinig@fahce.unlp.edu.ar

Resumen

Este artículo aborda el levantamiento cívico militar encabezado por el general Miguel Ángel Iñíguez, ocurrido el 30 de noviembre de 1960. Este alzamiento fue el último intento de golpe de Estado peronista puesto en práctica, como estrategia para la recuperación del poder luego del derrocamiento de Perón en 1955. Las repercusiones que generó se filtraron en los debates de la época acerca del mantenimiento o no del estado de sitio y del Plan CONINTES, del otorgamiento de la legalidad al peronismo, del proceso de normalización de la CGT y del rol que los militares debían cumplir en la sociedad. A su vez, su estudio, nos ha permitido reflexionar sobre la relación de larga data entre Ejército y peronismo, y la reactualización de esta relación durante el período de la Resistencia, y la cuestión, mucho más amplia, de las relaciones entre civiles y militares que caracterizaron a la época.

Summary

This article addresses the civic-military uprising led by General Miguel Ángel Iñíguez, which took place on November 30, 1960. This insurrection is the last peronist attempt of coup d'état as strategy to return to power after the overthrow of Perón in 1955. This uprising had an effect on the debates of that time about maintaining or not the state of siege and the CONINTES Plan, granting full legal recognition to the peronist movement, as well as the debates concerning the process of normalizing the CGT and the role that Armed Forces should play in society. This study has also helped us to reflect on the old standing relation between Peronism and the Army and this new instance of that relation during the period of the Resistance; and the broader issue of the civic-military relations that characterized the period.

PERONISTAS Y MILITARES.

UNA VIEJA RELACIÓN EN UN NUEVO CONTEXTO

En estas páginas nos proponemos abordar un hecho que ha pasado casi inadvertido para la historiografía; me refiero al levantamiento del general Miguel Ángel Iñíguez, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 1960, durante el gobierno de Arturo Frondizi. Fue el último intento de golpe de Estado peronista puesto en práctica. Probablemente, su ausencia o su breve mención en la bibliografía sobre el período se deba al hecho de su inmediato fracaso o a su opacamiento por la importancia que adquirió el levantamiento cívico-militar encabezado por el general Valle unos años antes; convertido en un hecho mítico de la tradición peronista por el final trágico que sufrieron muchos de sus participantes. Sin embargo, examinarlo cobra relevancia en la medida en que su abordaje abre una oportunidad para reflexionar sobre algunas problemáticas referentes al momento en el cual tuvo lugar. Este hecho se filtró en los debates que mantuvieron los actores políticos de la época acerca del mantenimiento o no del estado de sitio y del Plan CONINTES, del otorgamiento de la legalidad al peronismo, del levantamiento de la intervención que recaía sobre la CGT y del rol que los militares debían cumplir en la sociedad, entre otras cuestiones.

El levantamiento de Iñíguez, además, adquiere significado, porque para algunos autores constituye el hecho que marca un punto de inflexión en relación a las estrategias de lucha del peronismo. Ernesto Salas, lo ha señalado como el acontecimiento que marca el fin de la «resistencia peronista»¹. Por su parte, Daniel James sostiene que este suceso constituyó la última acción emprendida por grupos clandestinos de origen gremial y que, a partir de ese momento, se produjo un incremento de la separación entre activistas sindicales y grupos clandestinos². A su vez, Marcelo Raimundo ha señalado que luego del fracaso de esta acción, la vía militar, que hasta ese momento implicaba alianzas entre civiles peronistas y miembros leales de las Fuerzas Armadas, empezó a decaer como método de lucha

¹ Ernesto Salas, *La Resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de La Torre*, 2ª ed., Buenos Aires, Retórica Ediciones Altamira, 2006, p. 14.

² James sostiene que a partir de la década del sesenta se observa un proceso de burocratización de aquellos militantes sindicales que se habían destacado en la Resistencia durante los años cincuenta, a la vez que los integrantes de los grupos comandos serían reclutados cada vez más entre jóvenes de clase media, preferentemente estudiantes. Daniel James, *Resistencia e integración: El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, 2ª ed., Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010, pp. 198-207.

y, entre algunos sectores del ala izquierda del peronismo, comenzó a imponerse la idea de crear una fuerza militar autónoma surgida de los propios militantes³.

Por otro lado, el levantamiento de Iñíguez constituye un hecho que nos permite pensar sobre la relación de larga data entre peronismo y militares, cuestión que —a su vez— forma parte del problema mucho más amplio de las relaciones entre civiles y militares que caracterizaron el momento político en el cual las acciones tuvieron lugar. Esta problemática nos lleva a plantearnos dos interrogantes que guiarán el desarrollo de este trabajo: por un lado, qué explicación merece que sectores del peronismo recurrieran a miembros de las Fuerzas Armadas como posibles aliados para la recuperación del poder en una estrategia de lucha que incluía el golpe de Estado, y a la vez, por qué había militares en disponibilidad para estrechar dichas alianzas con el peronismo.

LOS HECHOS

El levantamiento de Iñíguez, también conocido como Revolución del 60 o levantamiento del COR (Centro de Operaciones de la Resistencia), tuvo sus epicentros en el Regimiento 11 de Infantería de Rosario y en la ciudad de Tartagal, en Salta, en la madrugada del 30 de noviembre de 1960. Los hechos se produjeron en un contexto caracterizado por el incremento de las hostilidades entre el gobierno y el peronismo, que había dado lugar al resurgimiento de la actividad insurreccional por parte de este último, suspendida, o al menos limitada, durante los primeros meses de la presidencia de Arturo Frondizi, iniciada el primero de mayo de 1958. Para el historiador Daniel James, la toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre en enero de 1959 y la huelga general que apoyó dicha acción fueron los hechos que marcaron la ruptura definitiva de las relaciones entre Frondizi y el peronismo. Así, el año 1959 estuvo caracterizado por la proliferación de huelgas, atentados y una fuerte movilización de las bases peronistas⁴. A la vez que se intentó otorgarle a la actividad clandestina llevada a cabo por el peronismo, una estructura más organizada⁵.

³ Marcelo Raimundo, «La política armada en el peronismo», en: *Cuadernos del CISH*, año 3, n° 4, La Plata, Edulp, segundo semestre de 1998, pp. 222-223.

⁴ Daniel James, *op. cit.*, pp. 158-159.

⁵ *Ídem*, p. 199.

Parte de la información que los historiadores han utilizado para reconstruir la organización clandestina del peronismo en ese momento fue obtenida a través del discurso pronunciado por el teniente coronel Hamilton Díaz en el curso de guerra contrarrevolucionaria dictado en la Escuela Superior de Guerra, en octubre de 1961⁶. Según dicho documento la máxima estructura del peronismo en el país estaba conformada por el Comando Nacional Peronista, cuyo jefe era Miguel Ángel Iníiguez⁷, y en el cual participaban, entre otros, Armando Cabo⁸, Julio Barredo⁹ y Dante Viel¹⁰. A esta estructura estaban subordinados el Consejo

⁶ Hamilton Alberto Díaz, «Lucha contra el terrorismo», conferencia dictada en el curso de guerra contrarrevolucionaria en la Escuela Superior de Guerra, 19 de octubre de 1961, publicado en *Lucha Armada* n° 3, junio-julio-agosto 2005. Disponible en: <http://www.robertobaschetti.com/pdf/CONFERENCIA%20HAMILTON%20DIAZ.pdf>. (último ingreso: 15/01/2013).

⁷ El general Miguel Ángel Iníiguez fue uno de los militares que tomó parte en la acción defensiva del gobierno peronista durante el golpe de Estado de 1955. Al mando del Regimiento 11 de Infantería de Rosario, llegó hasta Córdoba, que estaba sitiada. En febrero de 1959 fue descalificado por un tribunal militar por falta gravísima, a raíz de una carta dirigida al presidente Frondizi, en la que le cuestionaba al presidente la entrega de la economía y la soberanía política al capitalismo norteamericano y le recordaba el apoyo peronista en las elecciones por las cuales había llegado a ser presidente. Además, era crítico del creciente liberalismo que predominaba en las Fuerzas Armadas. Ver: «Carta Abierta del General Miguel Ángel Iníiguez al Dr. Arturo Frondizi», en *Resistencia peronista y plan CONINTES (1956-1975)*, Colección n° 13, Área Centro de Documentación y Archivo, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata; *La Prensa*, 1/12/1960; y Liliana Garulli, Liliana Caraballo, Noemí Charlier y Mercedes Cafiero; *Nomeolvides. Memoria de la Resistencia Peronista (1955-1972)*, Buenos Aires, Biblos, 2000, p. 84.

⁸ Armando Cabo fue dirigente sindical de la UOM. Ligado a la figura de Eva Perón, fue apartado de la dirigencia de la CGT al poco tiempo de la muerte de la primera dama. Integró la Resistencia peronista. Estuvo vinculado a Augusto Vandor y luego de su muerte, fue desplazado de la cúpula del sindicato por el grupo de Lorenzo Miguel. En los setenta apoyó a la Juventud Peronista y a Montoneros y fue integrante del Partido Peronista Auténtico. Falleció en 1996. Norberto Galasso, *Los Malditos*, vol. 1, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005, p. 74.

⁹ Durante el gobierno peronista, el coronel Julio Barredo fue agregado militar en la embajada argentina en Francia; ayudante de campo del secretario de Ejército, general Humberto Sosa Molina y colaborador, desde distintos cargos, con el jefe del Ejército, general Franklin Lucero. En 1955, fue pasado a retiro en las purgas efectuadas por la Revolución Libertadora. *Clarín*, 1/12/1960.

¹⁰ Dante Viel fue un dirigente sindical, de origen rosarino. Fue uno de los fundadores de la Unión del Personal Civil de la Nación. Integró la CGT Auténtica y posteriormente, el Consejo Superior Peronista. Junto con otros sindicalistas y políticos como Armando Cabo, Andrés Framini, Sebastián Borro, Avelino Fernández y Arnaldo Lizaso, apoyó la acción de la Juventud Peronista en los setenta. También integró el Partido Peronista Auténtico, que se enfrentó al gobierno de Isabel Perón. Falleció a principios de la década de 2000. Disponible en: <http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/98.html> (último ingreso: 31/01/2014).

Coordinador y Supervisor del Peronismo, que concentraba la actividad política, y el COR (Centro de Operaciones de la Resistencia), a través del cual trabajaba Iñíguez. Esta última estructura procuraba centralizar las actividades subversivas¹¹. También cabe recordar que en ese momento el delegado de Perón era Alberto Campos, un hombre ligado a la UOM y a la CGT.

Esta era, a grandes rasgos, la estructura organizativa peronismo. La red que describe el documento de Hamilton Díaz era mucho más amplia y compleja. Sin embargo, los historiadores nos advierten sobre la inconveniencia de exagerar dicha organización, puesto que la información proviene de una fuente de carácter militar. James señala que a las Fuerzas Armadas les convenía exagerar la organización y planificación de la actividad subversiva para justificar su accionar represivo y de control, que en ese momento se materializaba en la implementación del Plan CONINTES¹². Por lo tanto, no nos resulta fácil comprobar cuál era el verdadero grado de alcance, efectividad y autoridad que dichas estructuras poseían sobre el movimiento peronista en general, ni su nivel de estabilidad en el tiempo. Organismos como el COR y el APRI, que dependía de aquel, estaban formados por militares que habían sido pasados a retiro en las purgas de la Revolución Libertadora. E inclusive, en Córdoba, los militares retirados tenían una organización propia¹³.

Durante esta etapa, el accionar de la «resistencia peronista» había adquirido nuevas características que la diferenciaban del período anterior a 1959. Entre ellas cabe mencionar que el profesionalismo se había incrementado, se realizaban acciones de mayor envergadura, los mecanismos de detonación habían sido perfeccionados, a la vez que existía un circuito de provisión de insumos para la fabricación de explosivos desde las provincias del interior a Buenos Aires¹⁴. Por otro lado, los golpes cívico-militares de carácter peronista, en general, consistían en la toma de cuarteles; contaban con la participación de militares retirados y partían de la premisa de que al ponerse en marcha lograrían el apoyo de oficiales en actividad. En ellos, los militares tenían la dirección, mientras que los civiles

¹¹ Hamilton Díaz, *op. cit.*, pp. 10-12. Fragmentos del documento de Hamilton Díaz han sido reproducidos en Liliana Garulli, *op. cit.*, pp. 188-190, a la vez que Daniel James lo toma como fuente de sus argumentaciones. Daniel James, *op. cit.*, pp. 199-200.

¹² Daniel James, *op. cit.*, p. 199.

¹³ *Ídem*, p. 200.

¹⁴ *Ídem*, p. 201.

desarrollaban un papel secundario que consistía en la toma de estaciones radiales, sabotajes, cortes de líneas ferroviarias y telefónicas. Los militares poseían las armas y tenían la decisión de entregarlas a los civiles en el momento que consideraran necesario; pero en general, eran reacios a armarlos¹⁵.

Los hechos que nos ocupan tuvieron su inicio en Rosario con la toma del Regimiento 11 de infantería. Las acciones estuvieron lideradas por el propio Iñíguez y por el coronel Julio Barredo. La ocupación no duró mucho; al cabo de cuatro horas de lucha, ya había sido sofocada por la acción conjunta de los militares que estaban prestando servicios en el Regimiento, por la Gendarmería Nacional y por tropas santafesinas. Como resultado del enfrentamiento falleció, entre otros, el coronel Barredo¹⁶. En su uniforme, fue encontrada la proclama del movimiento. Estaba firmada por el «Comando Primer Ejército de la Reconquista y Liberación Argentina» y, según los diarios de la época, había sido redactada por el mismo Barredo¹⁷. Éste también tenía en su poder el plan de operaciones para Rosario, en el que quedaban involucrados militares en actividad, además de una libreta con direcciones de domicilios particulares y teléfonos donde figuraban los nombres de personas implicadas en el levantamiento¹⁸. Por su parte, Iñíguez logró fugarse.

En un primer momento, se pensó que lo que había permitido burlar la guardia del regimiento era el hecho de que Iñíguez se había presentado personalmente, siendo obedecido por quienes prestaban guardia, ya que allí era muy conocido porque había sido jefe del mismo hasta la llegada de la Revolución Libertadora¹⁹. Luego, se supo que el capitán Juan Carlos Rossi se había valido de su condición de oficial del Regimiento para sorprender a la guardia. Una vez apoderado de ella, había hecho su entrada Iñíguez, vestido de civil²⁰.

¹⁵ Marcelo Raimundo, *op. cit.*, p. 214.

¹⁶ En el enfrentamiento resultaron muertos el sargento 1° de infantería José Teodoro Valdez y los soldados conscriptos Juan Carlos Osorio y Aníbal Medina; mientras que el capitán de infantería Héctor Guillermo MacKinlay y el Teniente de Intendencia Arturo Antonio Gigena, quienes habían dirigido la defensa, recibieron heridas. Todos ellos pertenecían al Regimiento 11. *Clarín*, 01/12/1960.

¹⁷ *La Prensa*, 02/12/1960.

¹⁸ Los apellidos de los militares involucrados eran Jorge, Forni, Quirós y Berazain. *La Prensa*, 02/12/1960.

¹⁹ *Clarín*, 01/12/1960.

²⁰ *Clarín*, 13/12/1960.

En Tartagal, las acciones estuvieron dirigidas por el teniente coronel retirado Eduardo Escudé²¹ y el ex diputado peronista Tomás Ryan²². Escudé tomó la municipalidad mientras Ryan, al mando de un grupo de civiles, tomó el Batallón de Escuela e invitó a su jefe a sumarse a la rebelión. También, fueron tomados la estación de tren, el aeropuerto, la central telefónica y las comisarías de Tartagal, Mosconi y Vespucio. En este último sitio, ocuparon la estación de radiodifusión del campamento de YPF. En Salta, el levantamiento fue reprimido por la actuación del II Batallón de Monte, que culminó con la detención de Escudé, Ryan, y otros participantes. Algunos lograron escapar en jeeps pertenecientes a YPF y a la policía, pero varios fueron detenidos en Pocitos, localidad fronteriza con Bolivia²³.

Paralelamente al inicio de las actividades en Rosario, estallaron bombas en el Gran Buenos Aires.²⁴ Los diarios de la época coincidían en que el objetivo de dichos atentados habría sido aislar a Buenos Aires de los centros neurálgicos del país, aunque no todas las bombas estallaron en lugares estratégicos²⁵. Por otro lado, Mendoza quedó efectivamente incomunicada ya que fueron cortadas las líneas de teléfono y telégrafo, al igual las vías del ferrocarril San Martín²⁶.

El tercer blanco del movimiento lo constituía el arsenal San Lorenzo ubicado en Puerto Borghi, cerca de Rosario, con el objetivo de aprovisionarse de armas para ser distribuidas entre los obreros del frigorífico Swift de Rosario que estaban en conflicto, y que desarrollarían una acción de tipo insurreccional. En opinión del politólogo Rosendo Fraga, esta estrategia de distribuir armas entre los obreros era una muestra

²¹ Eduardo Escudé fue un militar de filiación católica y nacionalista. En 1957 fue retirado del ejército con el rango de teniente coronel, debido a sus vinculaciones con el peronismo. Era yerno de Francisco Prieto, el intendente de Tartagal al momento de producirse el levantamiento. En: <http://www.familia-escude.org/4eduardoaugusto.htm> (último ingreso: 29/01/2014).

²² Tomás Ryan, de origen salteño, fue legislador provincial y nacional durante el gobierno de Juan D. Perón. *Clarín*, 01/12/1960.

²⁴ Las bombas estallaron sobre todo en la zona sur del conurbano bonaerense, en Valentín Alsina, Lanús, Remedios de Escalada, Avellaneda y también en el noroeste, en Hurlingham y Villa Industriales. *Clarín*, 30/11/1960 y 01/12/1960; *La Nación*, 01/12/1960; *La Prensa*, 01/12/1960; *Democracia*, 01/12/1960.

²⁵ Las bombas estallaron en las vías del ferrocarril Roca, en el Comando de la II Región militar de Avellaneda, en Teléfonos del Estado, y en la planta transmisora de una empresa radiotelegráfica, pero hubo otras que estallaron en puntos no estratégicos, como el domicilio de un odontólogo, frente a una ferretería y en una fábrica de heladeras.

²⁶ *Clarín*, 01/12/1960; *La Prensa*, 01/12/1960.

de que la justificación que Iñíguez daría años después, al decir que contaba con la adhesión de otras unidades militares que luego no se sumaron, era falsa, puesto que, según el autor, cualquier militar en actividad hubiera rechazado la entrega de armas a obreros en conflicto²⁷. Según Horacio Verbitsky, a último momento, Iñíguez habría decidido suspender la toma del arsenal y que los tanquistas marcharan a Tartagal, puesto que temía que la entrega de armas a los obreros se escapara de control²⁸. Pero según los diarios de la época, el asalto al arsenal San Lorenzo se habría visto frustrado, no por la decisión de Iñíguez, sino por la policía de Fray Luis Beltrán que detuvo a los cabecillas momentos antes de realizarse el asalto, frente a lo cual, otras personas que participarían en los hechos, lograron escaparse²⁹.

En general, las pocas menciones que la bibliografía registra sobre el levantamiento de Iñíguez coinciden en que se trató de una acción desorganizada, donde reinó la improvisación. Al respecto, dos testimonios resultan interesantes. Uno es el del dirigente metalúrgico José Notaro, quien participó del levantamiento en Rosario. Según Notaro, Barredo murió por no matar al guardia que había dado la voz de alto. Esto habría sido decisivo en el fracaso porque Barredo era el único que tenía el mando y que conocía todo el armado. Su muerte habría obligado a los demás integrantes a salir del Regimiento ya que no sabían cómo continuar³⁰. A su vez, Roberto Miguélez, un militante de la Resistencia, que participó de los hechos en Tartagal con un grupo de civiles procedentes del Gran Buenos Aires, comenta que los contactos se realizaron entre personas que habían participado del movimiento del 9 de Junio de 1956 y que se conocían por sus actividades en la Resistencia; que les habían prometido armas y ropa que serían entregadas al llegar a Tartagal, a la vez que se les proporcionaría entrenamiento militar. Sin embargo, al llegar a allí, nadie los esperaba³¹.

La mayoría de los militares implicados habían sido pasados a retiro en las purgas de la Revolución Libertadora, pero también hubo participación de militares en

²⁷ Rosendo Fraga, *El Ejército y Frondizi, 1958/1962*, Buenos Aires, Emecé, 1992, p. 176.

²⁸ Horacio Verbitsky citado en Rosendo Fraga, *op. cit.*, p. 177.

²⁹ *Clarín*, 05/12/1960.

³⁰ José Notaro citado por Liliana Garulli, *op. cit.*, p. 230.

³¹ La misión que le había sido encargada al grupo de Miguélez consistía en detener a un coronel del Regimiento de Monte, acción que no pudieron realizar porque nunca supieron cuál era el camión que tenían que asaltar. Roberto Miguélez, citado por Liliana Garulli; *ibídem*, pp. 232-233.

actividad. La entrada de los insurgentes al Regimiento 11 fue permitida por personal del propio regimiento, hecho que motivaría el relevo de sus autoridades³². En Salta, también hubo militares en actividad implicados, del Batallón Monte Escuela y de la Gendarmería³³. Además, el capitán Antonio Campos, que se desempeñaba como jefe del distrito militar n° 34, con asiento en Casilda, una ciudad cercana a Rosario, el día de la insurrección, en su carácter de jefe del Plan CONINTES, se había presentado en la jefatura de policía de Casilda para hacerse cargo de la misma y había tomado armas para los sublevados³⁴.

Inmediatamente de producirse los hechos, comenzaron los pedidos de asilo en diferentes embajadas. La embajada uruguaya concedió asilo al coronel Rubén Berazay, al capitán Oscar Quiroga y al mayor César Quiroga, todos participantes del levantamiento del 9 de junio de 1956³⁵. Por otro lado, en Yacuiba, localidad fronteriza boliviana, se encontraban asilados otros militares, algunos de cuyos nombres se mantenían en secreto³⁶.

En un artículo de Liliana Nardoni que hace referencia a cómo se organizó la acción en Rosario, se menciona a un Comando Superior de la Resistencia, conformado por civiles, y un comando zonal que organizaba a los integrantes del COR en cuatro zonas (Norte, Sur, Este y Oeste)³⁷. A ello se sumaron los grupos dirigidos por René Bertelli³⁸.

³² El capitán Juan Carlos Rossi y el teniente 1° Febo Arturo Forni fueron quienes permitieron la entrada de los insurrectos al regimiento. *Clarín*, 01/12/1960.

³³ La toma de la comisaría de campamento Vespucio estuvo a cargo de un cabo en actividad del Batallón Monte Escuela. Además, la propia gendarmería suministró armas a los rebeldes. Por su parte, un diputado provincial de Salta, Fernando Suárez, denunció la pasividad ante los hechos del jefe del Batallón de Monte Escuela, el teniente coronel Luis Ulibarri Costas, y de la Gendarmería Nacional local. Integrantes de dichas instituciones fueron relevados de sus cargos y detenidos por inoperancia ante los hechos. A su vez, en Tartagal fue clausurado el local del cuerpo de bomberos porque había servido como lugar de reunión de los insurgentes. *Clarín*, 03/12/1960; 04/12/1960 y 07/12/1960.

³⁴ *Clarín*, 06/12/1960.

³⁵ *Clarín*, 01/12/1960.

³⁶ *La Prensa*, 17/12/1960.

³⁷ Liliana Nardoni, «Solos en la madrugada», en: *Vasto Mundo* Segunda época, n° 7, Rosario, Diciembre 1994 - Enero 1995, Editorial Amalevi, p. 54.

³⁸ René Bertelli fue un militante peronista de origen tucumano que participó en la organización de la Resistencia en Rosario. Hacia fines de los años sesenta integró las Fuerzas Armadas Peronistas y fue quien gestionó la adquisición del terreno para la experiencia guerrillera de Taco Ralo, en 1968. Horacio Verbitsky, *Ezeiza*, Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1985, p. 34.

Respecto de la fuga de Iñíguez, en un principio se creyó que estaba refugiado en Paraguay, pero ya para el 2 de diciembre este hecho fue desmentido³⁹. Posteriormente, se lo buscó en Buenos Aires, en Tucumán y en Santa Fe⁴⁰. La fuga de Iñíguez fue objeto de crítica de varios medios y sectores. Entre ellos, el diario *La Capital* de Rosario la equiparaba con la huida de Perón: «La publicidad de los planes criminales dará al pueblo la real idea de la amoralidad política de estos dirigentes que conducen a la juventud al suicidio insensato para huir, siguiendo el vergonzoso ejemplo, cuando sus personas corren peligro»⁴¹. *La Nación* sostenía: «Movidos por el resentimiento o impulsados por la pasión, acaso también algunos engañados por quienes en la hora del riesgo supremo se pusieron prudentemente a salvo (...) se proponían restaurar un régimen del que la República se liberó hace cinco años»⁴².

Las críticas no sólo se lanzaron contra Iñíguez y los insurrectos, sino que también se descargaron contra el gobierno. En una conferencia de prensa dada por el Ministro del Interior, Alfredo Vítole, uno de los periodistas preguntaba cómo podía ser que Iñíguez no hubiera sido detenido previamente, cuando tenía captura recomendada por las autoridades CONINTES, y cuando sus actividades eran conocidas y aparecía publicando artículos en semanarios y realizando reuniones⁴³.

Iñíguez no fue capturado y si bien la asonada de Rosario y Tartagal fue el último intento de golpe de Estado que puso en marcha, siguió conspirando durante algunos años más⁴⁴. Tenemos información de que en marzo de 1961 se hallaba en

³⁹ El subsecretario de relaciones exteriores, Miguel Ángel Centeno, anunció a la prensa que la embajada argentina en Paraguay había confirmado la presencia de Iñíguez en ese país, pero luego tuvo que desmentir estas afirmaciones. Había habido rumores de que dos personas se habían registrado en un hotel en Paraguay bajo los nombres de Miguel Ángel Iñíguez y Dante Viel. Sin embargo, esto habría sido una maniobra de peronistas exiliados en ese país para confundir al gobierno argentino. *Clarín*, 02/12/1960 y 03/12/1960.

⁴⁰ El 8 de diciembre, los diarios negaban que Iñíguez estuviera en Tucumán, lugar donde se lo había buscado y donde se creía que había mantenido contactos con guerrilleros que actuaban en el cerro, en el límite con Catamarca. Al día siguiente se decía que se lo estaba buscando en un barrio de Santa Fe. *Clarín*, 05/12/1960; *La Nación*, 08/12/1960 y 09/12/1960.

⁴¹ *La Capital*, 07/12/1960.

⁴² *La Nación*, 01/12/1960.

⁴³ *La Prensa*, 01/12/1960.

⁴⁴ «Memorándum de la policía bonaerense, firmado por Comisario J.C. Sánchez. De la división de Búsqueda», 08 de septiembre de 1961 y *El Plata*, 20/07/1962 en: *Resistencia peronista y plan CONINTES (1956-1975)*, op. cit.; Informe S.I.N. para SIDE, 29/10/1961 e Informe SIDE, 30/10/1961, ambos en Fondo

Uruguay, a donde había viajado para encontrarse con peronistas exiliados y tratar el tema de las próximas elecciones a realizarse en Santa Fe y la actitud que el peronismo debía tomar frente a ellas⁴⁵. Pero no sabemos con exactitud dónde estuvo entre el 30 de noviembre de 1960 y marzo de 1961⁴⁶. Finalmente, en 1964, encontramos a Iñíguez prestando declaraciones ante al comando CONINTES en Córdoba, debido a la acusación de estar involucrado con movimientos guerrilleros. Frente a ello, Iñíguez sostenía que había mantenido una actitud subversiva desde 1955 hasta mediados de 1963, porque no podía aceptar pasivamente el sometimiento de la patria a intereses extranjeros y el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y la Iglesia con los trabajadores. Desde mediados de 1963, había abandonado la actividad subversiva porque quería darle al gobierno la posibilidad de realizar la revolución nacional. Por otro lado, sostenía, el peronismo ya no necesitaba del golpe de Estado clásico para alcanzar el poder⁴⁷.

LOS ACTORES

Iñíguez formaba parte de los militares de extracción católica y nacionalista que habían apoyado al gobierno peronista. Sin embargo, el levantamiento de noviembre de 1960, en relación a los grupos que participaron y lo apoyaron, fue heterogéneo en su composición. El diario *La Prensa* decía que los participantes llevaban distintivos en sus solapas; que algunos eran nacionalistas y otros «adictos a la tiranía y pertenecientes a la *línea dura*»⁴⁸. En otra edición, agregaba que habían sido abandonados brazaletes con la sigla de la CGT y otros con la figura de Rosas

Centro de Estudios Nacionales (Fondo CEN), Subfondo Presidencia Arturo Frondizi, Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional de la República Argentina. 03.3.9.2.1/Ámbito Nacional. Caja 1.

⁴⁵ *Correo de la tarde*, 09/03/1961, en: *Resistencia peronista y plan CONINTES (1956-1975)*, op. cit.

⁴⁶ En mayo de 1963 fueron pegados afiches en la zona céntrica de Bahía Blanca, con el título «La Solución Nacional», firmados por Iñíguez. El afiche refería a las elecciones de 1963 y convocaba a la legalidad de los partidos políticos para participar en dichas elecciones y hablaba de una revolución pacífica, que de no concretarse, se realizaría violentamente de manos del comunismo. La revolución consistía concretamente en la realización de transformaciones económicas en el marco de la CEPAL. «Mensaje al pueblo de la Nación Argentina. La Solución Nacional», documento de la SIPBA, 27/05/1963 *Resistencia peronista y plan CONINTES (1956-1975)*, op. cit.

⁴⁷ *El Mundo*, 01/09/1964 en: *Resistencia peronista y plan CONINTES (1956-1975)*, op. cit.

⁴⁸ *La Prensa*, 01/12/1960.

a un lado y la estrella federal en el otro⁴⁹. Según *Democracia*, llevaban crucifijos colocados como distintivos y al respecto decía que los asaltantes del Regimiento 11 eran «tan inverosímiles» que pretextaban una devoción católica mientras disparaban sus armas⁵⁰. Por su parte, *La Nación*, afirmaba sobre la participación de miembros de la Alianza Libertadora Nacionalista⁵¹, agrupación cuyos militantes habían cumplido la función de grupos de choque en los actos opositores durante el gobierno peronista y que para este momento ya se encontraba disuelta⁵².

La participación de elementos nacionalistas en los sucesos generaba cierta incomodidad. Así, *La Nación* sostenía que el movimiento respondía a la ortodoxia peronista, por más que algunos civiles «interrogados fugazmente» se declararan partícipes de la «revolución nacionalista»⁵³. Y días posteriores, ya sin poder negar la participación de elementos nacionalistas, el diario decía que:

«A veces se invoca una concepción sedicente nacionalista que desprecia la tradición entrañable del pensamiento cristiano y occidental, para concebir formas en que la dictadura de presuntas elites o de supuestos hombres providenciales reemplaza al consentimiento popular alcanzado por procedimientos regulares...»⁵⁴.

Para *Democracia*, algunos sectores intentaban desvirtuar el concepto de nacionalismo con una politización «errónea» y «anacrónica» del mismo. En nombre del nacionalismo, algunos «fanáticos» pretendían restaurar formas de vida y regímenes condenados y olvidados⁵⁵.

Además del componente nacionalista, otro actor importante que tuvo participación en el levantamiento fue el sindicalismo; en especial, el gremio de la UOM. En opinión de Daniel James, el período posterior a 1959 se caracterizó por una acentuación de la diferenciación entre activistas sindicales y grupos clandestinos. Los líderes sindicales adoptaron una actitud cada vez más pragmática sobre la colaboración en

⁴⁹ *La Prensa*, 02/12/1960.

⁵⁰ *Democracia*, 03/12/1960.

⁵¹ *La Nación*, 02/12/1960.

⁵² Julio César Melon Pirro, *El peronismo después del peronismo: resistencia, sindicalismo y política luego del 55*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2009, p. 55.

⁵³ *La Nación*, 01/12/1960.

⁵⁴ *La Nación*, 04/12/1960.

⁵⁵ *Democracia*, 06/12/1960.

actividades clandestinas. Algunos de ellos se habían comprometido a una huelga general si el golpe de noviembre de 1960 tenía éxito. Los locales gremiales fueron usados como locales de reunión la noche del golpe, donde los activistas esperaban la señal para actuar, tal como sucedió en los edificios de la UOM y de la CGT mendocinas⁵⁶.

El caso de la UOM fue el que cobró más relevancia en los medios. Los días 24 y 26 de noviembre habían sido retirados 17.500.000 pesos en efectivo de la cuenta que el sindicato poseía en el Banco Nación, una suma que sus dirigentes no pudieron justificar. Algunos de ellos fueron detenidos, mientras que los más representativos se fugaron. Augusto Vandor, Avelino Fernández y Rosendo García dejaron de frecuentar la sede del sindicato y sus propios domicilios; lo mismo José Rucci, que no había podido explicar su presencia en Rosario desde el 16 de noviembre⁵⁷. En un testimonio, José Notaro, quien distingue como cabecillas del movimiento, junto con Iñíguez y Barredo, a los sindicalistas Dante Viel y Armando Cabo, admite que la UOM retiró ese dinero del banco para apoyar el levantamiento. Para Notaro, volver a poner el dinero en la caja fuerte fue un acto de ingenio y los militares se vieron sorprendidos cuando lo encontraron allí. Tuvieron que esconder todas las armas que había en la sede para evitar la intervención⁵⁸.

Un informe de la SIDE del 30 de noviembre sostenía que ninguna agrupación gremial había participado y que los dirigentes gremiales que habían adherido al levantamiento lo habían hecho en carácter personal y no como representantes de las organizaciones que lideraban. Por su parte, los sindicalistas peronistas trataban de demostrar que nada tenían que ver con los hechos⁵⁹. Sin embargo, otro informe del día siguiente admitía que dirigentes de las 62 Organizaciones se mostraban reservados en sus declaraciones porque algunos de ellos se hallaban comprometidos con los sucesos o habían sido apalabrados previamente. Entre ellos, el dirigente metalúrgico Avelino Fernández, que habría actuado como enlace. De acuerdo a manifestaciones de dirigentes de las 62 Organizaciones, el movimiento debía tener alcance nacional y había fracasado por las vinculaciones con nacionalistas y clericales, pero un próximo intento tendría éxito⁶⁰.

⁵⁶ Daniel James, *op. cit.*, p. 204.

⁵⁷ *Clarín*, 07/12/1960.

⁵⁸ José Notaro citado por Lilliana Garulli, *op. cit.*, p. 230.

⁵⁹ Informe SIDE, 30-11-610, Fondo CEN, *op. cit.*, 03.3.9.1.4/Partes de diarios de novedades gremiales, Caja 1.

⁶⁰ Informe SIDE 1-12-60, Fondo CEN, *op. cit.*

El 4 de diciembre, una reunión extraordinaria del cuerpo de delegados de la UOM, tuvo lugar de manera secreta. El objetivo era conformar una comisión de defensa de la entidad para reclamar por los dirigentes detenidos, a la vez, pedían aclaración sobre la participación que los miembros del consejo directivo podían haber tenido en el levantamiento y decidir sobre el destino que se le daría a los fondos hallados en la caja fuerte del sindicato. Por otro lado, delegados de comisiones internas habían pedido convocar a un paro de 24 horas, siempre y cuando los dirigentes no estuvieran implicados en los hechos⁶¹. El 6 de diciembre, una comisión especial, compuesta por dirigentes del interior, se hizo cargo de la dirección de la UOM ante la ausencia de su mesa directiva que se encontraba prófuga⁶². A su vez, la mesa coordinadora de las 62 Organizaciones también fue reemplazada por integrantes del interior⁶³.

Otros de los gremios implicados fue el de la carne. Su principal dirigente, Eleuterio Cardoso fue arrestado en San Pedro, mientras que otros miembros del sindicato, trabajadores del frigorífico Swift de Rosario, sufrieron detenciones⁶⁴. También, la CGT de Rosario se vio involucrada puesto que se habían encontrado brazaletes con la inscripción de este organismo en el Regimiento 11; hecho que fue desmentido por sus autoridades a través de un comunicado⁶⁵. El Ejército salió a responderle a través de otro comunicado, diciendo que la vinculación de sus dirigentes a los hechos era incuestionable⁶⁶. A su vez, la mesa directiva del SUPE de la seccional Vespucio fue otra de las organizaciones comprometidas. Las tres cuartas partes de sus miembros fueron detenidos y tres se fugaron. El sindicato fue intervenido⁶⁷.

La presentación de recursos de Hábeas Corpus y los comunicados de distintas organizaciones pidiendo por la libertad de los detenidos civiles comenzaron a sucederse día tras día, sobre todo, desde mediados de diciembre. En esos años

⁶¹ Informe SIDE 6-12-60, Fondo CEN, *op. cit.*

⁶² Informe SIDE 6-12-60, Fondo CEN, *op. cit.*

⁶³ Informe SIDE 14-12-60, Fondo CEN, *op. cit.*

⁶⁴ *Clarín*, 09/12/1960. Un informe de la SIDE del 30 de noviembre de 1960 ya mencionaba la vinculación de Eleuterio Cardoso con el levantamiento. Informe SIDE 30-11-60, Fondo CEN, *op. cit.*, 03.3.9.1.4/Partes de diarios de novedades gremiales, Caja 1.

⁶⁵ *Clarín*, 04/12/1960.

⁶⁶ *Clarín*, 09/12/1960.

⁶⁷ *Clarín*, 07/12/1960. Pedro Gomis, el secretario general de SUPE fue detenido en City Bell a los pocos días del levantamiento. Se lo acusaba de mantener contactos con Perón. Finalmente fue liberado el 26 de diciembre de 1960, junto con Eleuterio Cardoso. *Clarín*, 08/12/1960 e Informe SIDE 26-12-60, Fondo CEN, *op. cit.*, 03.3.9.1.4/Partes de diarios de novedades gremiales, Caja 1.

hizo su aparición COFADE, la entidad que agrupaba a familiares de los detenidos gremiales y políticos, militantes peronistas y abogados que reclamaban por la libertad de los presos CONINTES⁶⁸. Ya en diciembre de 1960, se registra su participación a través de manifestaciones públicas, como la que el 21 de diciembre tuvo lugar en la Plaza de Mayo, y que no estuvo exenta de represión policial⁶⁹. Por otro lado, el 16 de diciembre una delegación de dirigentes metalúrgicos se reunió con el general Fraga para probar la inocencia del secretariado nacional de la UOM y para justificar el retiro de los 17 millones de pesos⁷⁰.

El diario *Clarín* se manifestó sobre este acercamiento entre los dirigentes de la UOM y los militares y entre aquellos y la Iglesia. Para este medio, las consecuencias del golpe habían sido un vuelco en los sectores sindicales, en especial los de las 62 Organizaciones. Hasta el 30 de noviembre, estos habían preferido tratar con el gobierno. Pero a partir de esa fecha, se habrían inclinado por tratar en primer lugar, con las Fuerzas Armadas y la Iglesia. De hecho, los dirigentes de la UOM también habían tenido una entrevista con el cardenal Caggiano⁷¹. El 19 de diciembre, representantes de la UOM se reunieron con Fraga y obtuvieron la libertad de los dirigentes Luis Pugliese, Vicente Monlior, José Notaro, Lorenzo Miguel y Osvaldo Pérez⁷². A principios de 1961, representantes de las 62 Organizaciones se entrevistaron con Toranzo Montero para, entre otras cosas, solicitar la terminación de los procesos a los detenidos y una amnistía⁷³. Finalmente, el 16 de marzo, fecha en que la CGT fue entregada a la comisión de los 20 para iniciar el proceso de normalización, la orden de captura que pesaba sobre Augusto Vandor y demás dirigentes que se encontraban prófugos fue levantada⁷⁴.

⁶⁸ Mauricio Chama, «La defensa de presos políticos en la Argentina en la primera mitad de la década del sesenta. Apuntes sobre la confluencia entre núcleos profesionales peronistas y de izquierda», en: *Congress of the Latin American Studies Association*, Río de Janeiro, Brasil, 14/11/2009.

⁶⁹ *Democracia*, 21/12/1960.

⁷⁰ *Clarín*, 14/12/1960.

⁷¹ *Clarín*, 19/12/1960. En este sentido, un informe de la SIDE decía que la comisión provisoria de la UOM había aceptado, de manera solapada, una propuesta de Álvaro Alsogaray, de no intervenir el gremio a cambio de que en las próximas elecciones, a realizarse el 10 de enero de 1961, los integrantes de la comisión directiva encabezada por Vandor no integraran las listas. Informe SIDE 14-12-60, Fondo CEN, *op. cit.*, 03.3.9.1.4/Partes de diarios de novedades gremiales, Caja 1.

⁷² Informe SIDE 19-12-60, Fondo CEN, *op. cit.*

⁷³ *Clarín*, 09/02/1961.

⁷⁴ *Democracia*, 16/03/1961.

ALGUNAS LECTURAS SOBRE LOS HECHOS

La postura del gobierno frente al levantamiento quedó manifestada en un discurso del presidente Arturo Frondizi transmitido por radio la noche del 2 de diciembre. Los ejes centrales del discurso fueron los siguientes: remarcar que el intento de golpe de Estado no había tenido apoyo masivo de la gente, que había sido una operación digitada por Perón y que los políticos y sindicalistas estaban ejerciendo un doble juego ya que exigían legalidad, esto en relación a los pedidos de normalización de la CGT, al mismo tiempo que atentaban contra ella. A la vez, justificaba la necesidad de mantener el estado de sitio y el Plan CONINTES⁷⁵.

Frondizi no fue el único que concibió el levantamiento como un plan orquestado por Perón. Al respecto, el diario *La Nación* decía: «Así, en el sector de los nostálgicos del régimen depuesto se impusieron los violentos [...] con manifestaciones terroristas que nadie ha olvidado y en la que jugaban a veces su propia partida elementos comunistas y aparecían órdenes o consignas llegadas desde el exterior»⁷⁶.

Se pensaba que a través de un dirigente textil que había viajado a España en octubre, José Manuel Mendoza, apodado «el Negro Mendoza», habrían llegado las instrucciones de Perón para realizar el levantamiento⁷⁷. Por eso, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ángel Miguel Centeno, había pedido al gobierno de España, a través del embajador de ese país en Argentina, que extremara el control sobre las actividades de «provocación» efectuadas por Perón⁷⁸. Además, el comunicado N° 5 del comandante en jefe del Ejército CONINTES, sostenía que los hechos de Rosario y Tartagal eran «una manifestación más del plan insurreccional cuyo desarrollo fue anticipado a la opinión pública en el comunicado n° 4 [...] del día 29-VII-60, y que confirma la realidad de la agresión que lleva a cabo la organización subversiva totalitaria llamada «peronismo» en todo el país contra la República»⁷⁹.

Según Daniel James, en cada acción subversiva del peronismo, las Fuerzas Armadas tendían a ver una organización que partía desde Perón, pasando por el Consejo Coordinador del peronismo, hasta las organizaciones de base⁸⁰. Pero también sostiene que si bien es discutible que el levantamiento haya respondido

⁷⁵ *Clarín*, 03/12/1960.

⁷⁶ *La Nación*, 01/12/1960.

⁷⁷ *Clarín*, 01/12/1960.

⁷⁸ *Clarín*, 03/12/1960.

⁷⁹ *Clarín*, 01/12/1960.

⁸⁰ Daniel James, *op. cit.*, p. 199.

a un plan de Perón, no es descabellado pensar que sí lo fue, puesto que el ex presidente tenía poco que perder al impulsar o apoyar iniciativas de este tipo. Ello le permitiría seguir gravitando en la política argentina como factor de poder y de perturbación y minar la posición de los sectores del peronismo propensos a entablar alianzas con el gobierno. James considera que el levantamiento del COR puede encuadrarse en el marco de unas instrucciones de 1959, que se suponían provenientes de Perón, mencionadas por Hamilton Díaz en su famosa conferencia. Dichas instrucciones establecían una serie de etapas para el accionar de la Resistencia que, gradualmente, volverían ingobernable el país, culminando en una gran insurrección en la que las fuerzas militares se agruparían en torno a los grupos clandestinos, mientras que los sindicatos irían a la huelga general⁸¹. Había algunos elementos que permitían suponer que el levantamiento probablemente respondiera a esas directivas y fuera el intento de concreción de la gran insurrección nacional prevista para la última etapa⁸².

En cambio, Marcelo Raimundo presenta una opinión diferente al sostener que Perón se opuso a la vía golpista desde un primer momento ya que ésta generaba retrocesos y desviaciones en la organización de la resistencia. Además, era peligroso por los efectos represivos que provocaba y porque los militares solían echarse atrás a último momento si el éxito no estaba asegurado⁸³. John W. Cooke, el delegado de Perón hasta principios de 1959, aunque reconocía la necesidad de la ayuda militar, consideraba que un golpe de este tipo debía realizarse cuando estuvieran dadas las condiciones para efectuar el asalto final, pero antes debía crearse el clima insurreccional y esta actividad debía tener un contenido político⁸⁴. Por otro lado, una carta de Perón con fecha del 12 de diciembre de 1960, dirigida a su ex ministro de Relaciones Exteriores, Ildefonso Cavagna Martínez, que se encontraba

⁸¹ *Ídem*, pp. 200-201.

⁸² La primera etapa consistía en agudizar el caos hasta desarticular el sistema policial, obtener armamentos y desarrollar un impacto psicológico más que un éxito concreto en las operaciones. La segunda, procuraba obligar a las Fuerzas Armadas a actuar para reprimir. La tercera, ya preveía el accionar sobre organismos militares y sería iniciada en las zonas limítrofes del país, siendo Buenos Aires su objetivo final. Hamilton Alberto Díaz, *op. cit.*, s.p.

⁸³ Para Perón, los militares retirados debían tener una acción de carácter pasivo, consistente en neutralizar a las Fuerzas Armadas y provocar intrigas y conflictos en su interior. Y su actividad debía estar subordinada al trabajo político. Marcelo Raimundo, *op. cit.*, pp. 207-208.

⁸⁴ *Ibidem*.

exiliado en Montevideo, mostraba la actitud adversa de Perón frente a los hechos: «no creo que las posibilidades sean a tan corto plazo como algunos imaginan. Aún queda mucho por descomponerse y un camino que recorrer hasta que el caos cunda intensamente como se necesita». Y más abajo, decía: «El fracaso del golpe militar de Iñíguez les ha de haber mostrado la inconsistencia de la organización actual y los inducirá a cumplir las Directivas que propugnan un organización y preparación adecuadas»⁸⁵. Sin embargo, la condena del hecho a posteriori, una vez conocido su fracaso, no demuestra que en un principio Perón no lo pueda haber apoyado o inclusive, ordenado. Por otro lado, es de destacar, que Cooke ya no era su delegado al momento de producirse el levantamiento.

Las medidas que tomó el gobierno frente a los hechos generaron gran polémica en la opinión pública. Diferentes gremios, partidos políticos y los propios medios gráficos se manifestaron frente a ellas. Si bien el levantamiento resultó un fracaso, se convirtió en una excusa para reavivar otros temas de discusión y fue utilizado, por los distintos actores que participaron del debate, en beneficio propio y con sentidos opuestos.

Por decreto del Poder Ejecutivo, fueron clausurados los locales del Partido Justicialista en todo el país. El texto del decreto decía que se había comprobado la participación en los hechos de dirigentes provenientes del PJ y que dicha conducta, que acataba órdenes del exterior, era una muestra de que los partidos, que ahora utilizaban el término justicialista, constituían una continuidad respecto de los partidos disueltos por el decreto 3855/55⁸⁶. Esta decisión le costó a Frondizi críticas provenientes de diferentes sectores. Entre ellas, la de Ricardo Balbín quien apoyaba la represión para combatir los intentos subversivos, pero sostenía que Frondizi era responsable de la situación de inestabilidad que se vivía y que él había contribuido a crear la situación propicia para la realización de golpes de

⁸⁵ *Clarín*, 12/01/1961.

⁸⁶ *Clarín*, 06/12/1960. El Partido Peronista había sido disuelto por el decreto 3855/55 emitido por el gobierno de la Revolución Libertadora. La ley de amnistía, 14436, promulgada por el Congreso el 22 de mayo de 1958, legalizó el uso de los símbolos peronistas, permitió la propaganda de dicha ideología, a la vez que sus dirigentes políticos y gremiales fueron habilitados para ocupar cargos públicos o sindicales. Pero el Partido Peronista como tal, siguió permaneciendo en un limbo legal. Robert Potash, *El Ejército y la política en la Argentina. De Perón a Frondizi*. Buenos Aires, Sudamericana, 1981, p. 381.

Estado. Además, no estaba de acuerdo con que se respondiera a la situación con más proscripciones⁸⁷.

De esta manera, el debate sobre los hechos de Rosario y Tartagal se entrelazó con la discusión por la cuestión de la legalización de los partidos políticos y de las elecciones que se realizarían en febrero de 1961. El diputado del Partido Radical Movimiento Popular de Santa Fe, Agustín Rodríguez Araya, elevó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que diera explicaciones sobre las medidas adoptadas para prevenir el levantamiento, y sobre la cuestión de la legalización de todos los partidos políticos⁸⁸. Mientras tanto, *La Nación* criticaba esta postura, al sostener que se partía de una premisa equivocada: que el peronismo continuaba en la insurrección porque se le cerraban las puertas de la legalidad. Según este medio, el peronismo no reconocería a ningún gobierno surgido luego de septiembre de 1955, por eso el «integracionismo»⁸⁹ propuesto por Frondizi era irrealizable⁹⁰. Sin

⁸⁷ *Clarín*, 07/12/1960 y *La Prensa*, 08/12/1960. Probablemente, la crítica de Balbín a la decisión del gobierno de responder a los hechos con más proscripciones, reflejara un clima de optimismo para la UCRP, que había resultado vencedora en las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960. En la misma declaración, Balbín acusaba a Frondizi de no respetar la voluntad popular surgida en los comicios. Sin embargo, el triunfo de la UCRP era aparente, ya que los votos en blanco, producto de una alianza del peronismo con el comunismo y sectores disidentes de la UCRI liderados por Ismael Viñas, con un porcentaje del 24,7 %, habían superado a los votos obtenidos por la UCRP que alcanzaron un 24,3 %, quedando el partido oficialista en tercer lugar, con el 21 % de los votos. Ver: María Cristina Tortti, «Soluciones: una experiencia de acercamiento entre el peronismo y la izquierda durante la campaña por el voto en blanco en 1960», en: *Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo*, Tres de Febrero, 4-6 de noviembre de 2010.

⁸⁸ *Clarín*, 01/12/1960.

⁸⁹ El término «integracionismo» hacía referencia a uno de los elementos constitutivos del desarrollismo. Implicaba una relación armónica entre la clase trabajadora y los empresarios, en la que cada uno debía seguir sus intereses pero sin sacrificar el bien de la nación. Para ello era preciso que los trabajadores se mantuvieran organizados sindicalmente. De ahí los intentos de Frondizi y Frigerio por concretar acuerdos con los sindicatos. Daniel James, *op. cit.*, pp. 152-154.

⁹⁰ *La Nación* sostenía que el otorgamiento de la legalidad al peronismo sólo llevaría a fortalecer a su corriente legalista y a suministrar a la corriente combativa recursos para atentar contra el orden. Cuestionaba el proceder del gobierno sobre los partidos justicialista y comunista, cuyos locales habían sido clausurados, porque dichas acciones daban letra a sus receptores para decir que estaban siendo objeto de medidas discriminatorias. El diario proponía la reforma del Estatuto de los partidos políticos, para que la exclusión apareciera como el resultado de la incapacidad de estos partidos para adaptarse a la ley y no como un acto discriminatorio por parte del Ejecutivo. *La Nación*, 04/12/1960 y 06/12/1960.

embargo, otro diario, eminentemente antiperonista, como *La Capital* de Rosario, celebró el cierre de los locales del partido justicialista, frente a lo cual sostenía que se trataba de «una labor amarga pero indispensable, de eliminación de los grupos subversivos», que el gobierno realizaría con ayuda de las Fuerzas Armadas y de los gobernadores de provincia, una tarea de «saneamiento democrático» que contaba con el apoyo del pueblo⁹¹. Este medio, al igual que *La Nación*, no sólo aprovechaba para instigar al presidente a adoptar políticas en contra del peronismo, sino también para cuestionar sus relaciones con Rogelio Frigerio. De esta manera, exigía al presidente a que expulsara de la función pública a los «elementos antidemocráticos» y sostenía que el levantamiento se había realizado con el respaldo de funcionarios cercanos a Frondizi⁹². Por su parte, la UCRP de Capital Federal, ni bien ocurridos los hechos presentó un pedido de informe a los ministros de defensa y del interior para que dieran explicaciones sobre las medidas preventivas que se habían adoptado, y en dicho informe cuestionaba la presencia de «jefes de reconocida filiación peronista nacionalista» en puestos clave de la aeronáutica⁹³. La UCRP de Santa Fe, interpretaba lo sucedido como producto del clima de inseguridad y desconfianza que reinaba, y cuestionaba la legitimidad del gobierno de Frondizi⁹⁴.

En las filas peronistas, el Consejo Coordinador y Supervisor, a través de un comunicado, negaba estar implicado en los hechos y decía que las acusaciones que recaían contra ese organismo consistían en una maniobra para impedirle concurrir a las próximas elecciones. Sin embargo, tampoco los condenaba. Sostenía que habían sido originados por un sector con «afán patriótico» para defender a «la patria»⁹⁵. En otro informe, decía que la proclama revolucionaria no mencionaba al peronismo y que se intentaba justificar la incapacidad para gobernar, adjudicando a dicha fuerza política la culpa de todos los males que sufría el país desde 1955⁹⁶.

⁹¹ *La Capital*, 07/12/1960.

⁹² *La Capital*, 04/12/1960.

⁹³ *La Prensa*, 03/12/1960.

⁹⁴ *La Nación*, 19/12/1960.

⁹⁵ *La Capital*, 05/12/1960.

⁹⁶ *La Capital*, 06/12/1960. El texto de la proclama sostenía lo siguiente: «El Ejército Revolucionario de Liberación Nacional al Pueblo de la República solicita su apoyo, para recuperar la moral, el patrimonio y el juego normal de las instituciones, al margen de todo sectarismo y con el fin de afianzar la unión nacional». *La Prensa*, 02/12/1960.

Las cuestiones gremiales también atravesaron el debate. El levantamiento se produjo en el momento en que estaba por culminar el proceso de normalización de la CGT. A fines de 1960, ésta debía ser entregada a los peronistas, que habían ganado las elecciones. Según Alain Rouquié, Frondizi habría aprovechado el hecho para ganar, cómodamente, fama de antiperonista frente a aquellos sectores que veían con malos ojos la restitución de la central gremial al peronismo, ya que le otorgaba una excusa para demorar el traspaso y reforzar las medidas de control sobre el sindicalismo peronista⁹⁷. En relación a esto, *Democracia* decía que los hechos de Rosario y Tartagal habían retrasado la labor de la Comisión de los 8, fundamentalmente, las actividades relacionadas con la normalización de la CGT⁹⁸. Por otro lado, los gremios no peronistas aprovecharon la oportunidad para lanzar sus críticas, no sólo contra el peronismo sino también contra Frondizi y Frigerio. La mesa coordinadora de los 32 gremios pedía que se investigara a los miembros del gobierno que habían colaborado en el levantamiento y cuestionaba las políticas integracionistas de Frondizi⁹⁹. El MUCS, ex 19, de carácter pro comunista, sostenía la idea de que el golpismo sería evitado con el desarrollo de políticas económicas y sociales de carácter progresista y proponía la convocatoria a un plenario nacional de gremios para formar una conducción unitaria. Además, repudiaba el golpe al decir que éstos debían decidirse en asambleas con participación de los trabajadores¹⁰⁰.

Las medidas del Poder Ejecutivo también afectaron el desarrollo de la libertad de prensa, razón por la cual, Frondizi volvió a recibir duras críticas. Entre esas medidas figuran el cierre de la agencia *Prensa Latina* y la detención de algunos de sus integrantes; que junto con la detención de varios militantes comunistas es una prueba de que se creía que había elementos de dicha filiación involucrados en los

⁹⁷ Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, t. II, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 178.

⁹⁸ La Comisión de los 20 se había formado para llevar adelante la normalización de la CGT. Estaba integrada por representantes de las 62 Organizaciones, los 32 gremios democráticos y el MUCS. La comisión de los 8 había sido designada por aquella, a fin de acelerar dicho proceso. *Democracia*, 21/12/1960.

⁹⁹ *La Capital*, 02/12/1960.

¹⁰⁰ *Clarín*, 02/12/1960.

hechos¹⁰¹. También fueron clausurados *Nuevo País y Azul y Blanco*. Este último de tendencia nacionalista. A ello se sumó la detención de su director, Marcelo Sánchez Sorondo¹⁰².

EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS ANTE LOS HECHOS

El levantamiento de Iñíguez se produjo en el marco de la crisis desatada entre el Presidente Frondizi y el comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Severo Toranzo Montero, que había estallado en octubre de 1960 y que condujo a la renuncia del secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher. Según Robert Potash, este episodio marcó un cambio en la actitud del Ejército, que decidió abandonar la política de vigilancia seguida hasta el momento, para adoptar una actitud de control directo sobre el Presidente¹⁰³. Para el politólogo Rosendo Fraga, las consecuencias del levantamiento habrían sido reforzar el antiperonismo en las Fuerzas Armadas y generar una imagen negativa del peronismo entre los cuadros de suboficiales, incrementando la concepción que de este movimiento se tenía como fuerza insurreccional. En términos concretos, se tradujo en un fortalecimiento de la posición del nuevo secretario de guerra, el general Rosendo Fraga. Éste emitió un comunicado en el que los acontecimientos de Rosario y Tartagal fueron interpretados como una acción del peronismo, manipulado por el comunismo; diferenciándose del memorándum emitido por Toranzo Montero

¹⁰¹ La sospecha que recaía sobre el comunismo pudo haber estado basada en el acercamiento de posiciones entre peronistas y comunistas que se había producido a comienzos de 1960 para las elecciones legislativas del 27 de marzo, en la que dicha alianza sostuvo la defensa del voto en blanco. En la época se hablaba del «giro a la izquierda» del peronismo para hacer referencia a ello. Ver: María Cristina Tortti, *op. cit.*

¹⁰² Al parecer, Sánchez Sorondo había tenido la intención de participar en el levantamiento pero finalmente no lo hizo. María Valeria Galván, *Publicaciones periódicas nacionalistas de derecha: las tres etapas de Azul y Blanco (Azul y Blanco 1956-1960, Segunda República 1961-1963, Azul y Blanco-Segunda Época 1966-1969)*, Tesis de Doctorado en Historia, La Plata. FAHCE, Memoria Académica, febrero de 2012, p. 199. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.456/te.456.pdf> (último ingreso: 10/02/2013).

¹⁰³ La doctrina de vigilancia se basaba en la idea de que no era necesario ni conveniente destituir al presidente, ya que este podía ser presionado para que adoptara las políticas que los militares creían convenientes. Robert Potash, *op. cit.*, pp. 430-436.

en octubre, citado anteriormente, en el que peronismo y comunismo habían sido considerados como dos fuentes de amenaza igualmente poderosas¹⁰⁴.

En la conferencia de Hamilton Díaz, también se aprecia esta vinculación entre peronismo y comunismo. En relación a la organización y formas de actuar del peronismo, sostenía que estaba influenciado por la «mecánica revolucionaria comunista», por «su forma celular, por la infiltración en los organismos y lugares claves, por el estudio y determinación de los objetivos y la confección de los con-dignos planes de sabotaje». Además, decía que del COR, se desprendían ramas terroristas que actuaban independientemente entre sí, y que estaban amparadas por los infiltrados que el peronismo poseía en los organismos de seguridad¹⁰⁵.

Estas interpretaciones, que con diferentes matices vinculaban al peronismo con el comunismo, se relacionan con un cambio de doctrina en las Fuerzas Armadas. En el período 1957-1962, comenzaron a sentarse las bases para la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que reemplazaría a la Doctrina de Defensa Nacional (DDN), que había imperado durante el gobierno de Perón. Mientras que esta última requería unas Fuerzas Armadas profesionalizadas e incorporadas a un proyecto político en el cual el desarrollo industrial para la defensa iba unido con el desarrollo nacional, la primera implicaba un involucramiento de las Fuerzas Armadas en la Guerra Fría, alineándose con Occidente, para el desarrollo de una guerra a escala planetaria contra el comunismo, librada en el propio territorio nacional. De esta manera, los militares ya no se preparaban para un posible enfrentamiento con los países limítrofes, sino que la población nacional se había convertido en un enemigo potencial, el «enemigo interno»; por lo que el desarrollo industrial ya no era concebido como algo primordial¹⁰⁶.

Las Fuerzas Armadas necesitaban encontrar una misión que justificara su accionar ante la sociedad. Resolvieron esta cuestión adoptando el concepto de «guerra contrarrevolucionaria» desarrollado en Francia durante las guerras de

¹⁰⁴ Rosendo Fraga, *op. cit.*, p. 178.

¹⁰⁵ Hamilton Alberto Díaz, *op. cit.*, s. p.

¹⁰⁶ Para Ernesto López, la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional por parte de los sectores liberales de las Fuerzas Armadas tenía un objetivo político que consistía en lograr que los militares profesionalistas adhirieran al modelo de nación impulsado por dichos sectores liberales. Como las purgas que se aplicaban a los militares nacionalistas y peronistas no podían aplicarse a los profesionalistas, necesitaban ofrecerles una doctrina que les resultara atractiva y que evitara identificaciones con el peronismo. Ernesto López, *Seguridad Nacional y sedición militar*, Buenos Aires, Legasa, 1987, p. 136.

descolonización en Indochina y Argelia¹⁰⁷. Esto tuvo varias consecuencias locales. Las Fuerzas Armadas comenzaron a desarrollar una acción de vigilancia sobre la sociedad en general y sobre los gobiernos civiles, en especial sobre el Presidente, lo que se expresó en la realización de golpes de Estado y planteos militares, justificados por el nuevo rol que se adjudicaban como defensoras de intereses supremos de la Nación. La intervención militar en asuntos que eran propios de las autoridades civiles se convirtió en un procedimiento considerado normal por amplios sectores de la sociedad, dando lugar a lo que Alfred Stepan ha denominado como «modelo moderador», una situación en la que los civiles esperan que los militares intervengan para recomponer el régimen político y en donde dicha intervención no es considerada patológica sino normal¹⁰⁸.

Frente al levantamiento de Iñíguez, el diario *La Nación* celebraba su fracaso diciendo que había comenzado una época signada por los planteos militares que era una nueva forma de «canalización institucional de la violencia». Las Fuerzas Armadas habían asumido un nuevo rol en la estructura de poder, y mientras ellas mantuvieran su unidad, la fuerza se encauzaría a través del ejercicio de la función de «vigilancia», que a veces desembocaba en la «sugerencia», otras veces en la «presión», pero de esta manera, los golpes de Estado quedaban descartados por falta de apoyo militar; lo que dejaba a los rebeldes sin recursos materiales¹⁰⁹. En este

¹⁰⁷ Ver: Samuel Amaral, «Guerra revolucionaria: de Argelia a la Argentina, 1957-1962», en: *Investigaciones y Ensayos*, n° 48, Buenos Aires, 1998; Daniel Mazzei, «La misión militar francesa en la escuela superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia», en: *Revista de Ciencias Sociales* n° 13, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2002; y Marie Monique Robin, *Escuadrones de la muerte: la escuela francesa*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

¹⁰⁸ Alfred Stepan, *Brasil: los militares y la política*. Buenos Aires, Amorrortu, 1974, pp. 80-82. A su vez, David Pion Berlin define esta injerencia de los militares en asuntos propios de las autoridades civiles, como «autonomía ofensiva». Este tipo de autonomía implica que los militares extiendan sus prerrogativas a costa de una disminución de las atribuciones del gobierno civil. Se diferencia de la «autonomía defensiva», que es aquella que protege la intromisión del poder civil en asuntos propios de la institución militar. Dos indicadores clave del aumento de la autonomía ofensiva y que están presentes en el período que estudiamos, son la incumbencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y en la recolección de información de inteligencia. David Pion Berlin, «Autonomía militar y democracias emergentes en América Latina», en: Ernesto López y David Pion Berlin, *Democracia y cuestión militar*, Bernal, UNQ, 1996, pp. 15, 19 y 34.

¹⁰⁹ También decía que hasta el momento la democracia había estado desvinculada de la fuerza, pero que en 1955 había comenzado una etapa en que la fuerza estaba siendo incorporada a la democracia, en un proceso con sobresaltos, pero que conduciría a un ordenamiento institucional más sólido. *La Nación*, 04/12/1960.

sentido, *The New York Times* también felicitaba el hecho de que la sublevación no había encontrado apoyo entre los militares de alta graduación¹¹⁰. Y con un objetivo diferente, pero que en definitiva reconocía el papel de vigilancia de las Fuerzas Armadas y la necesidad del presidente de contar con su aprobación para poder gobernar, *Democracia* decía que estas acababan de reafirmar que respaldarían al gobierno y que la hora de los golpes de Estado había terminado. Ellas apoyarían «la unión de todos los argentinos» y «el progreso económico», que concretamente significaba la aplicación de las políticas desarrollistas¹¹¹.

En general, los militares fueron reacios a hacer referencias al peronismo en sus producciones teóricas. En lugar de ello, preferían hablar de un abstracto peligro comunista cuando en realidad, lo que buscaban era desperonizar al Ejército y a la sociedad. Las disertaciones sobre el peligro comunista, lo que pretendían, era encontrar una coherencia con la DSN y justificar la alineación con Occidente. Sin embargo, en la práctica, no se anduvo con rodeos en el reconocimiento de la centralidad del peronismo¹¹².

En los procedimientos para reprimir los hechos de Rosario y Tartagal se vislumbra la influencia de la idea de guerra contrarrevolucionaria, lo que se tradujo en la implementación del Plan CONINTES. Este plan había sido aplicado para sofocar los focos insurreccionales ocurridos en Tucumán y Córdoba, en diciembre de 1959 y febrero de 1960, respectivamente. Hasta ese momento, las actividades consideradas terroristas eran investigadas por la policía y juzgadas por la justicia ordinaria. De ahora en más, el decreto 2628 del 13 de marzo de 1960 sometía a las policías provinciales y de la Capital Federal a la autoridad de las Fuerzas Armadas, mientras que el país era dividido en zonas de defensa contra la subversión. Por el decreto 2639, se crearon consejos de guerra encargados de juzgar a los acusados de actividad subversiva¹¹³. La división del territorio en un cuadrículado imitaba la organización territorial que los franceses habían aplicado en Argelia. La justificación ideológica de esta disposición territorial, junto con la creación de consejos de guerra, estaba vinculada con el concepto de «enemigo interno». Como se creía que el enemigo se ocultaba y mimetizaba entre la población con la ayuda de esta

¹¹⁰ *La Prensa*, 03/12/1960.

¹¹¹ *Democracia*, 22/12/1960.

¹¹² Ernesto López, *Seguridad Nacional y sedición militar*, op. cit., pp. 155-157.

¹¹³ Daniel James, op. cit., p. 202.

última, la población nacional se convirtió en enemigo potencial y se transformó en el campo de batalla, a la vez que la obtención de información para conocer la estructura organizativa del enemigo, se convirtió en un problema fundamental¹¹⁴.

En las declaraciones de representantes del gobierno que se dieron inmediatamente después de haberse producido el levantamiento, uno de los elementos recurrentes que se oyó fue que la consecuencia inmediata sería el mantenimiento del Plan CONINTES y del estado de sitio, que estaban a punto de ser suspendidos¹¹⁵. Al día siguiente de producidos los hechos, ya estaba constituido el Consejo de Guerra Especial, que funcionaría en Rosario presidido por el comandante de la III División, general Víctor Cordes¹¹⁶. El 7 de diciembre los detenidos en Tartagal fueron trasladados a Rosario para prestar declaraciones ante el tribunal de Guerra creado en esa ciudad¹¹⁷. Los juicios fueron sumarísimos y el 13 de diciembre se dieron a conocer las primeras sentencias a militares. El capitán Rossi y el teniente Forni, fueron condenados a 7 y 8 años de prisión, respectivamente, con accesoria de destitución, por el delito de rebelión. Además, se les imputó el costo de las armas y municiones faltantes y de los daños causados en el Regimiento. Recordemos, ellos fueron quienes permitieron a los rebeldes la entrada al Regimiento 11¹¹⁸. La segunda serie de sentencias fue dada a conocer el 17 de diciembre y en ella se condenó a los cabecillas. Por el delito de rebelión fueron sentenciados, el teniente coronel (RE) Eduardo Escudé, a la pena de diez años de prisión y destitución y el capitán (RE) Antonio Campos, a seis años de reclusión y destitución¹¹⁹.

¹¹⁴ Daniel Mazzei, «Tiempo de revancha: la desperonización del Ejército durante la Revolución Libertadora», en: *Taller*, n° 12, Buenos Aires, abril de 2000, pp. 124-132.

¹¹⁵ Según declaraciones del ministro de defensa, Dr. Justo Villar y del ministro del interior, Dr. Alfredo Vítolo, en *Clarín*, 01/12/1960. El estado de sitio regía desde el 11 de noviembre de 1958, y había sido implantado a raíz del conflicto petrolero. En principio se estableció por un lapso de 30 días, pero el 11 de diciembre fue promulgada una ley, la 14785, que determinaba su vigencia por tiempo indeterminado. Robert Potash, *op. cit.*, p. 399.

¹¹⁶ *Clarín*, 01/12/1960.

¹¹⁷ *La Nación*, 08/12/1960.

¹¹⁸ Otros cargos fueron el delito de conspiración para la rebelión, para lo cual se otorgaron penas de entre uno y tres años de prisión y el delito de encubrimiento, que implicó penas de seis a ocho meses de prisión. Además de la destitución de la fuerza militar de aquellos militares que fueron encontrados culpables. *Clarín*, 13/12/1960.

¹¹⁹ *Clarín*, 17/12/1960.

La aplicación del Plan CONINTES implicó la detención de cientos de militantes y de allanamientos, no sólo en locales partidarios y sindicales, sino también en domicilios particulares en diversas provincias, tales como Córdoba, Mendoza, Tucumán, La Pampa y Buenos Aires, además de Salta y Santa Fe. Según las declaraciones del secretario de guerra, general Fraga, querían comprobar si los sediciosos tenían planes más ambiciosos, por eso, a través de los juicios y detenciones se procuraba indagar sobre la existencia de contactos y ramificaciones, en base, no a lo efectivamente actuado sino a su planificación¹²⁰. Muchas de las detenciones recayeron sobre militantes que habían participado en el levantamiento del 9 de junio de 1956, ya que dicha participación los convertía en sospechosos, al igual que su filiación peronista¹²¹. Para James, la consecuencia más inmediata del levantamiento fue la detención de muchos militantes que hasta el momento habían podido sortear la persecución realizada por las fuerzas militares¹²². Los detenidos civiles, finalmente, fueron puestos a disposición de la Justicia federal, para ser juzgados por ésta, no sin antes declarar ante el Consejo de Guerra de Rosario¹²³. Según Liliana Nardoni, de los civiles que participaron en la toma del Regimiento 11, 48 fueron condenados por la Justicia Federal, de acuerdo a las penas establecidas por el Plan CONINTES, a tres años de cárcel¹²⁴. Algunos de los implicados obtuvieron su libertad con la amnistía de septiembre de 1963; entre ellos, el general Escudé. A su vez, el decreto 626/61, del 27 de julio de 1961, permitió la liberación de varios de los civiles detenidos, entre ellos, Tomás Ryan¹²⁵.

REFLEXIONES FINALES

Las preguntas han motivado el desarrollo de este trabajo. Por un lado, por qué un sector del peronismo recurrió a las Fuerzas Armadas para intentar un golpe de Estado como estrategia de recuperación del poder, y por otro, por qué existía esa disponibilidad de militares favorables a estrechar alianzas con el peronismo. Marcelo Raimundo ha realizado algunas apreciaciones que pueden pensarse como

¹²⁰ *Clarín*, 02/12/1960.

¹²¹ *Clarín*, 13/12/1960.

¹²² Daniel James, *op. cit.*, p. 202.

¹²³ *Clarín*, 08/01/1961.

¹²⁴ Liliana Nardoni, *op. cit.*, p. 57.

¹²⁵ *La Nación*, 28/07/1961.

respuestas al primer interrogante. Más allá de las reservas de Perón y de Cooke respecto de la participación de los militares y del golpismo como estrategia de lucha, lo cierto es que las conspiraciones entre militares y civiles peronistas se dieron desde el inicio de la Resistencia, y el propio Cooke reconoció la importancia de la ayuda militar en su concepción de la lucha insurreccional¹²⁶. Además, en el momento en que se produjo el levantamiento de Iníiguez, Cooke ya había sido desplazado y en el peronismo se había impuesto el sector más ortodoxo.

Para Raimundo, las razones por las cuales los peronistas recurrían a los militares radicaban en el hecho de que se creía que el regreso de Perón sería inminente y que bastaría un golpe de Estado rápido y efectivo para lograr su retorno al poder; además de que los militares poseían las armas y esto generaba que los civiles se aglutinaran en torno a ellos. Pero el factor más importante residía en que todavía prevalecía la vía insurreccional como método de lucha, la cual preveía la culminación de dicho proceso con un estallido general en el cual los militares tendrían su participación. Esto último implicaba que el peronismo no se planteara la creación de un ejército propio y que aún viera a un aliado en algunos sectores del Ejército. Esta concepción sobre la cuestión militar en el peronismo comenzó a cambiar con la irrupción de los Uturuncos, a mediados de 1959, quienes por primera vez se propusieron la creación de una fuerza militar autónoma surgida de los mismos grupos de civiles; idea que marcaría la década siguiente, y que en un principio se mantuvo dentro de los cánones de la concepción de lucha insurreccional. El ejército habría comenzado a ser visto por sectores juveniles del peronismo como una fuerza de ocupación que debía reemplazarse¹²⁷. De esta manera, el intento guerrillero de los Uturuncos y el levantamiento de Iníiguez se ubicarían en un punto de inflexión que marcaría el final de una época y el comienzo de otra en la manera de concebir la problemática militar por parte del peronismo en sus estrategias de lucha. El primero, anunciando la concepción de lucha armada que prevalecería en la década del sesenta y el segundo, marcando el fin de las formas de lucha que habían primado durante los primeros años de la «resistencia».

Consideramos muy atinadas las interpretaciones de Raimundo, pero, a los efectos que han motivado este trabajo, podemos profundizar aún más y observar que esa relación entre militares y peronismo va más allá de motivos instrumentales,

¹²⁶ Marcelo Raimundo, *op. cit.*, p. 207.

¹²⁷ *Idem*, pp. 222-223.

como el hecho de que los militares poseyeran las armas y de que se les asignara una función en la estrategia insurreccional. Los orígenes del vínculo entre militares y peronismo se remontan a los comienzos del gobierno peronista, y más allá de las características que adquirió durante la época de la Resistencia, dicha relación puede ser entendida como un factor de continuidad entre ambas etapas. Como ha expresado Ernesto López, la actitud de Perón de lucir su uniforme de general en los actos públicos era una muestra fehaciente de la importancia que lo militar había adquirido entre la ciudadanía. Perón incorporó a los militares en su proyecto político, un proyecto en el que política de defensa, profesionalización militar y desarrollo industrial iban de la mano¹²⁸. Pero además, no hay que olvidar los orígenes militares del propio Perón.

Por otro lado, la relación entre militares y peronismo no sólo sirve para explicar por qué los militantes de la Resistencia recurrieron a aquellos, sino también, puede darnos algunas respuestas acerca de por qué existía una disponibilidad de militares dispuestos a encarar golpes de Estado en favor del peronismo. Si bien, el levantamiento de Iñíguez fue heterogéneo en la composición de sus miembros, sus cabecillas eran de tendencia nacionalista. Ya hemos explicado en páginas anteriores, el reemplazo de la Doctrina de Defensa Nacional, que había primado durante los gobiernos peronistas, por la Doctrina de Seguridad Nacional, llevado a cabo por los sectores liberales de las Fuerzas Armadas. No sería descabellado sugerir que quienes lideraron el levantamiento eran nostálgicos defensores de aquella doctrina que había prevalecido durante el gobierno de Perón, y si no, véase lo que decía Escudé sobre las Fuerzas Armadas en años posteriores, cuando cumplía su condena por la participación en el levantamiento del COR:

«Estas fuerzas ya no pueden ser las bandas armadas de los jefes primitivos (...) ni los grandes ejércitos de grupos económicos, políticos o sociales privilegiados; ni pueden ser tampoco las montoneras de los Caudillos o el Ejército de línea de Buenos Aires, ni los «azules legalistas» o los «colorados golpistas».

¹²⁸ Ernesto López, «El peronismo y la Doctrina de Defensa Nacional», en *Seguridad Nacional y Sedición Militar*, op. cit., y «Perón y la Doctrina de Defensa Nacional» y «Perón en el gobierno», en: *El primer Perón. El militar antes que el político*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2009; también ver: Alain Rouquié, «Ejército y Sindicatos: los militares argentinos en el sistema peronista», en: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, t. I, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

«Las Fuerzas Armadas (...) deben contribuir en el Orden Social y económico (...) mediante sus obras públicas, sus fábricas especializadas, y sus tareas de investigación científica, colaborando en todo ello con otros sectores de la Sociedad»¹²⁹.

Por otro lado, en la carta que había dirigido a Frondizi, Iñíguez expresaba su opinión respecto del deber ser de las Fuerzas Armadas. Estas estaban viviendo una confusión transitoria. Se habían equivocado al derrocar a un gobierno constitucional, pero la mayoría de los jefes, oficiales y suboficiales poseían «el hondo sentido histórico de la nacionalidad que ayudaron a forjar», y por lo tanto no se prestarían a masacrar al pueblo para defender intereses extranjeros¹³⁰.

De lo anterior se desprende un panorama en el que los militantes peronistas recurrían a los militares a fin de lograr sus objetivos y estos no dudaban en intervenir en política. Pero como es bien sabido, esta no era una actitud limitada al peronismo y a los militares de dicha filiación o de tendencia nacionalista. Los militares eran actores legítimos de la política para el grueso de la sociedad argentina. Guillermo O'Donnell ha interpretado a la sociedad de esa época bajo el concepto de «pretorianismo de masas», desarrollado por Samuel Huntington. Para este autor, una situación de pretorianismo de masas se produce cuando existe un alto grado de movilización política pero no hay instituciones que puedan canalizar las demandas de los diferentes actores en disputa. No existen intermediarios legítimos para mediar en los conflictos ni acuerdo sobre cuál es el modo lícito de resolverlos. Por lo tanto, las fuerzas sociales se enfrentan unas a otras «desnudamente» y del

¹²⁹ Eduardo Escudé, *Por Dios y por la Patria*, Buenos Aires, Editorial Organización San José, 1968, p. 195-196. Este libro fue escrito mientras su autor cumplía la condena por su participación en el levantamiento de Iñíguez en el Penal Militar de Magdalena. Escudé sólo cumplió tres años de condena, ya que fue favorecido con la amnistía de septiembre de 1963. En 1968 pudo publicar el libro, al que agregó un prólogo en el que manifestaba su decepción ante la impronta liberal y extranjerizante del gobierno del presidente Juan C. Onganía, en quien en un principio había confiado por su condición de católico, a la vez que cuestionaba a las Fuerzas Armadas por permitir la entrega de la política y la economía nacional a un pequeño grupo aliado con los capitales extranjeros. *Ídem*, p. 12.

¹³⁰ Miguel Ángel Iñíguez, «Carta abierta del General Miguel Ángel Iñíguez al Dr. Arturo Frondizi», *Resistencia peronista y plan CONINTES (1956-1975)*, *op. cit.*, s.p.

modo en que son más capaces de hacerlo según su naturaleza¹³¹. Por su parte, Ernesto López, sin abandonar por completo dicha interpretación, nos advierte sobre el hecho de que los militares también pueden tener y poner en práctica un proyecto político propio¹³².

En una sociedad como aquella en que tuvieron lugar los sucesos estudiados, en la que la intervención militar, ya sea a través de golpes de Estado como de planteos, era aceptada por amplios sectores de la sociedad, cabe preguntarse si los golpes intentados por militares y civiles peronistas no constituían la otra cara de un mismo fenómeno. Si la sociedad veía con buenos ojos que los militares intervinieran en política, por qué los militantes peronistas no habrían de ver en la recurrencia a establecer contactos con miembros del Ejército, un recurso legítimo, o al menos, viable. Sobre todo, teniendo en cuenta que la relación del peronismo con la Fuerzas Armadas, y con el ejército en particular, era de larga data, tanto por el origen militar del propio Perón como por el lugar que los militares habían ocupado en el proyecto político impulsado por aquel.

¹³¹ Citado por Guillermo O'Donnell, en: «Modernización y golpes militares. Teoría, comparación y el caso argentino», en: *Desarrollo Económico*, vol. 12, n° 47, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1972, p. 9. En una sociedad de este tipo puede producirse lo que Huntington ha denominado como una situación de alto «control civil subjetivo», en la que distintos sectores sociales canalizan sus demandas a través de las Fuerzas Armadas, lo que presupone la participación militar en política y que el poder redunde en beneficio de algunos sectores sociales en perjuicio de otros. El control civil subjetivo se diferencia del control civil objetivo. Este último implica unas Fuerzas Armadas políticamente neutrales y altamente profesionalizadas, capaces de cumplir las órdenes del grupo civil que tenga autoridad legítima dentro del Estado. Mientras que la baja profesionalización es característica de las Fuerzas Armadas en situaciones de control civil subjetivo. Samuel Huntington, «Poder, ideología y profesionalidad. Las relaciones civiles militares en teoría», en: Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (comp.), *La institución militar en el Estado contemporáneo*, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 236 y 239.

¹³² Ernesto López ha cuestionado el concepto de «control civil subjetivo» desarrollado por Huntington y explicado en la nota anterior, sosteniendo que no contempla la posibilidad de que los militares puedan tener una proyección política autónoma. Para López, la profesionalización no garantiza la subordinación de los militares al gobierno civil, ya que militares altamente profesionalizados pueden inmiscuirse en política con un proyecto propio. Ernesto López, *Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín*, Bernal, UNQ, 1994, p. 26. En un sentido similar, Guillermo O'Donnell ha cuestionado la vinculación entre control civil objetivo y alta profesionalización, al sostener que la profesionalización lleva a los militares a apartarse temporariamente de la política, para retornar con golpes de Estado con objetivos más ambiciosos y por períodos más duraderos. Guillermo O'Donnell, *op. cit.*, p. 23.

Considerando la apreciación de Ernesto López sobre la capacidad de los militares para encarar un proyecto político propio, es factible preguntarse si el proyecto que estaban defendiendo los militares que participaron del levantamiento de Iñíguez, más allá de la filiación verdaderamente peronista que pudieran tener algunos de ellos, no era la Doctrina de Defensa Nacional, y el deseo de volver a formar parte de una institución, que no sólo los había excluido sino que estaba mutando hacia formas e ideologías diferentes de las que habían predominado en tiempos del peronismo.

Registro bibliográfico

GORZA, ANABELLA

«Peronistas y militares. Una vieja relación en un nuevo contexto», en: ESTUDIOS SOCIALES, revista universitaria semestral, año XXV, n° 49, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, segundo semestre, 2015, pp. 31-62.

Descriptorios · Describers

peronismo / resistencia / fuerzas armadas / relaciones cívico-militares

peronismo / armed forces / civil-military relations

Recibido: 11 / 06 / 2014

Aprobado: 17 / 11 / 2014